

## **Diversidad cultural, derecho y construcción de ciudadanía.**

### **Cultural diversity, law and construction of citizenship.**

**Autor:** Manuel Gustavo Ocampo Muñoa<sup>1</sup>

#### **Introducción**

En este escrito se pretende justificar que el enfoque intercultural del derecho promueve la convivencia en la diversidad basada en el dialogo, respeto, interacción e inclusión de las diferencias culturales lo que contribuye a la construcción de ciudadanía. Describe el problema que se enfrenta en el Estado de Chiapas, México para el diseño de una ciudadanía participativa. Se subraya la trascendencia de ese enfoque en lo jurídico, su desarrollo y perspectiva tomando como referente el contexto de los pueblos originarios de Chiapas. Se definen algunos de los elementos que se consideran trascendentes en la formación de ciudadanía en el contexto chiapaneco y se precisan los componentes que el enfoque intercultural del derecho puede aportar en el tema.

Se divide de manera didáctica en ocho apartados, el primero corresponde a esta introducción y las restantes al desarrollo de los temas.

En el planteamiento del problema, de manera breve se describe la importancia de la construcción de una ciudadanía y el desafío de la diversidad cultural en Chiapas.

Al referir a la interculturalidad y derecho, se expone el objetivo de ese enfoque jurídico, su desarrollo e implementación en contextos como el Chiapaneco, caracterizado por la presencia de diferentes colectivos que reclaman y defienden sus derechos ciudadanos.

En el apartado la construcción de ciudadanía e interculturalidad en Chiapas, se busca identificar algunos componentes que pueden abonar a la formación de ciudadanía, precisando los que desde el enfoque intercultural del derecho pueden alcanzarse.

En los desafíos de la construcción de ciudadanía desde el sistema electoral mexicano, se describen algunos retos que pueden enfrentarse en la búsqueda de buenas prácticas que legitimen la autoridad desde el mencionado sistema.

---

<sup>1</sup> Doctor en Derecho. Coordinador de Investigación y Posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Investigador Nacional Nivel 1. Email [manuel.ocampo@iij-unach.mx](mailto:manuel.ocampo@iij-unach.mx)

Bajo el rubro, propuesta para impulsar la ciudadanía intercultural, se justifica la necesidad de diseñar un eje transversal en la educación superior que promueve la construcción de ciudadanía.

Por último, se presentan las conclusiones y las fuentes de información.

### **Planteamiento del Problema**

La construcción de ciudadanía demanda que los miembros de la sociedad estén informados y de su compromiso para desempeñar un papel activo en la política; aún y cuando el desarrollo tecnológico del siglo XXI ha proporcionado al ser humano sofisticadas herramientas tecnológicas, acceso a bases de datos oficiales, redes sociales y diferentes aplicaciones, que son fuente de información en tiempo real y que bien pueden contribuir a la formación del ciudadano y ciudadana, esto parece no ocurrir. La ciudadanía se ha relegado a una relación política estéril frente al Estado, que se resume en el derecho a votar. El sentido de pertenencia al pueblo, comunidad, municipio, estado, nación tiende a desaparecer bajo escenarios de bienestar económico individual. La ciudadanía parece estar encerrada, en el constitucionalismo formal, en la mera descripción de los requisitos para adquirirla y poder sufragar, sin ponderar los contenidos que desde el pluralismo jurídico pueden apreciarse y que contribuyen al bienestar colectivo.

Uno de los desafíos apremiantes en el tema de la construcción de ciudadanía es el respeto a las diferencias en sociedades caracterizadas por la diversidad cultural, como es el caso del Estado mexicano. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 2, entre otras cosas, su composición pluricultural, el derecho a libre determinación de los pueblos originarios, la igualdad de hombres y mujeres, y el derecho a la participación política de estas últimas; sin embargo en el ámbito de las entidades federativas con presencia de personas pertenecientes a pueblos indígenas, los retos que se enfrentan en el diseño de ciudadanía incluyente requieren de un modelo que considere el diálogo como una herramienta que permita encontrar los puntos en común de los diferentes pueblos y comunidades, tal es el caso de la interculturalidad.

Chiapas es muestra de ese fenómeno social, al establecer en su ley fundamental local la existencia de doce pueblos originarios, lo que de alguna manera contribuye a visibilizarlos. Aunado a lo anterior, su ubicación geográfica lo convierte en puerta de acceso de migrantes

indígenas quienes en busca del sueño americano a veces se quedan a vivir en estas tierras, lo que genera nuevas identidades culturales que complican la construcción de ciudadanía.

Ante estas problemáticas, el enfoque intercultural del derecho se presenta como una alternativa para construir nueva ciudadanía en Chiapas, como una filosofía basada en la convivencia en la diversidad cultural, mediante la promoción del diálogo, el respeto, la interacción y la inclusión entre los diferentes, el aprendizaje de los saberes diversos y la cosmovisión de los pueblos y comunidades, puede contribuir en la formación de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con sus pueblos y comunidades originarias, promoviendo la enseñanza de sus derechos y obligaciones políticas.

Ahora bien, esta nueva forma de construir el derecho también genera un efecto en la construcción de ciudadanía, pues si la visión de lo jurídico debe ser incluyente y promover el dialogo y el respeto a las diferencias, las y los ciudadanos tendrán más alternativas de participación, lo que puede traducirse en retomar la confianza hacia las autoridades electorales. Desde una perspectiva intercultural los contenidos de los derechos políticos de los ciudadanos deben repensarse si se pretende vivir en una democracia participativa.

### **Interculturalidad y derecho**

El término interculturalidad hace referencia a las relaciones que existen entre los diversos grupos humanos que conforman una sociedad dada y que en la actualidad se usa como un término más complejo y polisémico que se refiere a las relaciones que existen dentro de la sociedad entre diversas constelaciones de mayoría-minoría, y que se definen no sólo en términos de cultura, sino también en términos de etnicidad, lengua, denominación religiosa y/o nacionalidad. (Dietz, 2017: 23-25)

La interculturalidad en el Derecho, combate la visión monista del sistema jurídico, es decir la postura que defiende la existencia de un solo sistema normativo, que por tanto no toma en consideración a las diferentes culturas, grupos, comunidades y pueblos que interaccionan en la sociedad. El enfoque Intercultural es una nueva forma de construcción del conocimiento jurídico, que parte de los destinatarios de la norma, de las entrañas de las comunidades, del día a día, del reconocimiento de la existencia de una sociedad plural y del respeto a las diferencias.

En algunas sociedades, la interculturalidad se utiliza para referir a la diversidad generada por la migración, mientras que en otras la misma noción se aplica para las interacciones entre pueblos indígenas y descendientes de colonizadores.

Se entiende como un derecho, que faculta al individuo a vivir en un entorno de riqueza cultural, de conocimiento recíproco y respeto mutuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas. (Díaz, 2011: 42)

Se manifiesta en lo jurídico como un discurso de diferentes acentos continentales, nacionales y regionales, así como sesgos disciplinarios de sus protagonistas las identidades étnicas, las dinámicas migratorias y la diversidad cultural.

En lo que atañe al mundo normativo, la interculturalidad parte del respeto a la autonomía de las formas de derecho propio de cada cultura. Autonomía que sólo podría tener como límites los provenientes de un eventual consenso de las culturas involucradas, nunca la imposición en torno a valores que no necesariamente son compartidos con la misma fuerza o voluntad.

La Interculturalidad es también, un tipo de relación que se establece intencionalmente entre culturas y que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida. El concepto incluye las relaciones que se establecen entre personas pertenecientes a diferentes grupos étnicos, sociales, profesionales, de género, etc. dentro de las fronteras de una misma comunidad.

La interculturalidad es un elemento que genera un discurso positivo que permite ponerse en el lugar del otro para entenderlo mejor y para descubrir que la cultura abarca múltiples puntos de referencia compartidos, como el idioma, la fe, la indumentaria, la gastronomía y las artes y oficios tradicionales; en otras palabras, lo intercultural es incluyente y toma en cuenta todas las aportaciones que generen competencias, conocimiento, ideas, nuevos enfoques, emprendimiento y prácticas culturales que enriquezcan el tejido social de las comunidades a las que vienen a formar parte, tal es el caso de las poblaciones migratorias; siendo estas razones las que posibilitan el acercamiento entre lo jurídico y lo intercultural. (Parlamento Europeo, 2015: 7)

Santos sostiene que la interculturalidad solamente se realiza en la democracia, es decir en el ideal de democracia intercultural que en latinoamérica para su realización se requiere del concurso de los siguientes componentes: Demodiversidad, representación democrática,

reconocimiento de derechos colectivos y nuevos derechos fundamentales, así como una nueva forma de educación. (Santos, 2010: 98)

La Demodiversidad, se refiere a la coexistencia de diferentes formas de deliberación democrática, del voto individual al consenso, de las elecciones a la rotación o al mandar obedeciendo, de la lucha por asumir cargos a la obligación-responsabilidad de asumirlos. Los criterios de representación democrática deben ser incluyentes, fundamentalmente de dos tipos: Uno de carácter cuantitativo y otro de tipo cualitativo, el primero de origen moderno, eurocéntrico, y el segundo de origen ancestral, indocéntrico.

El reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos originarios es otra condición necesaria para el efectivo ejercicio de los derechos individuales, por ejemplo, ciudadanía cultural como condición de ciudadanía cívica. De igual manera actualizar y reconocer nuevos derechos fundamentales que están relacionados con nuevas expectativas sociales por ejemplo el derecho al agua, a la tierra, a la soberanía alimentaria, a los recursos naturales, a la biodiversidad, a los bosques y a los saberes tradicionales.

En lo que toca a la educación esta debe ser orientada hacia formas de sociabilidad y de subjetividad asentadas en la reciprocidad cultural: un miembro de una cultura solamente está dispuesto a reconocer a otra cultura si siente que la suya propia es respetada, y esto se aplica tanto a las culturas indígenas como a las no-indígenas.

Por lo anterior la interculturalidad como filosofía aplicada en Latinoamérica tiene como característica que no es simplemente cultural, sino también política y, además, presupone una cultura común. No hay interculturalidad si no hay una cultura común, una cultura compartida. (Santos, 2007: 17-18)

La interculturalidad en el derecho mexicano emerge ligada a la diversidad cultural, cuya interpretación es compleja pero que puede argumentarse al lado de la universalidad de los derechos humanos, pues son el núcleo compartido de diversas preocupaciones teóricas y políticas en el mundo moderno, así como de las reflexiones filosóficas que las acompañan. (Beuchot, 2005: 23)

La Cultura Jurídica Mexicana al estar fuertemente influenciada por la cultura jurídica occidental se apeg a la conciencia de la existencia de un solo orden normativo, por lo que sólo remite a los sistemas normativos de otras culturas por la vía de la costumbre, la ética y

la situación social e histórica. Sin embargo, una cultura no evoluciona si no es a través de los contactos: lo intercultural es constitutivo de lo cultural. (Todorov, 1991: 76-77).

El sistema jurídico mexicano es de tradición monista y todas sus instituciones son argumentadas desde esa perspectiva, fue diseñado siguiendo los pasos de la dominación española: primero, la convicción de la superioridad ante el Otro, para conocerlo y adaptarse a él, con el fin de transformarlo y asimilarlo a su cultura. Segundo, el conocimiento e interpretación casi etnográfica del Otro, considerando que la buena información es la mejor forma de imponer el poder. Y tercero, la superioridad en el aspecto tecnológico, especialmente en la comunicación: esto permitió al colonizador infligir una derrota. (Todorov, 2007: 34).

El respeto a la diversidad, la inclusión, los derechos igualitarios, la buena vida, los saberes diversos, la cosmovisión, los derechos lingüísticos, son expresiones de este nuevo enfoque del derecho que genera un nuevo modelo de construcción en donde el dialogo entre los diferentes es el común denominador. Para que el derecho sea intercultural debe reconocer la existencia de diferentes sistemas de normas, que coexisten dentro de la organización estatal y pensar en el dialogo como la principal alternativa de solución a los conflictos sociales que esa diversidad puede generar.

En el derecho constitucional estatal Chiapaneco existe reconocimiento, protección y promoción de los derechos de los pueblos originarios, es decir la diversidad cultural se atiende al menos en lo general, sin embargo, en el tema de la ciudadanía se requiere identificar y armonizar los derechos culturales y los derechos políticos de todos los grupos, comunidades y pueblos que habitan en el Estado. En esto último con un enfoque intercultural en lo jurídico existe la posibilidad de proveer a las y los futuros ciudadanas y ciudadanos de herramientas que los conviertan en personas políticamente más participativas.

### **Construcción de ciudadanía e interculturalidad en Chiapas**

La construcción de ciudadanía alude a un proceso de formación en valores cívicos, éticos, culturales, jurídicos, políticos, entre otros elementos; que deben seguir las personas que se convertirán en ciudadanas y ciudadanos, necesariamente a cargo del Estado pero que se involucra, desde luego, otras instituciones tales como la familia y la escuela.

El sistema político es el que debe generar las competencias básicas que se requieren para desempeñarse como un ciudadano o ciudadana ejemplar, como por ejemplo el cultivar valores como la solidaridad, el bien común, la justicia, la paz, la libertad, la democracia, el respeto a las diferencias, la no discriminación, la inclusión, la igualdad, pero además conocer los derechos y deberes que la Constitución Federal, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Constitución del Estado de Chiapas, reconocen, promueven y protegen a la ciudadanía.

Propiciar la reflexión sobre el contenido de los considerados de índole político, las formas de participación ciudadana, las características de la democracia representativa, la estructura de los partidos políticos, los delitos electorales, la división del poder público, las autoridades en materia electoral, los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales, los derechos culturales reconocidos a los pueblos originarios incluyendo sus sistemas normativos y de solución de conflictos.

Es por lo anterior que al considerar al enfoque intercultural del derecho un artífice de la convivencia en la diversidad que mediante el respeto a las diferencias y al conocimiento de los saberes diversos y la cosmovisión de los pueblos originarios construye de forma diferente a la orientación occidental, ciencia jurídica y por supuesto puede también incidir en la construcción de ciudadanía intercultural.

La identidad cultural es el punto de partida para el diseño de ciudadanía en Chiapas en los inicios del siglo XXI, sin embargo la existencia de varias instancias, instituciones y ámbitos en donde conviven indígenas y no indígenas (mestizos y ladinos), donde coinciden luchando juntos, como en los partidos políticos, en las religiones, en las asociaciones mercantiles o de crédito, juntas de colonias urbanas como sucede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y en organizaciones no gubernamentales, contribuye a que dicha identidad no se fortalezca y por lo tanto disminuya la posibilidad de que se organicen esas minorías y reclamen sus derechos. (Chacón, 2005: 115)

En el Derecho Constitucional Estatal Chiapaneco el respeto y promoción de los derechos humanos es una obligación de los tres niveles de gobierno en consonancia con lo ordenado al respecto en la Constitución Federal y la Convención Americana de los Derechos Humanos y se incluye su enseñanza teórica y práctica en los planes de educación básica y media superior, mismo que deben además considerar el enfoque intercultural.

En consecuencia la construcción de ciudadanía debe considerarse inmersa en dichas estrategias y tener un primer acercamiento con el enfoque intercultural en el derecho, ensamblando el conocimiento de los valores cívicos y éticos con los derechos políticos y culturales, mediante la promoción del dialogo intercultural y el respeto a las diferencias que favorezcan y consoliden la democracia representativa con la participación de todas y todos, cumpliendo con las líneas fundamentales del moderno federalismo, la coexistencia del autogobierno y el gobierno compartido.

Si consideramos que los criterios de clasificación de los derechos fundamentales son exclusivamente de orden didáctico, es decir se diseñan para su enseñanza, pero en la realidad todos aparecen ligados entre sí, es adecuado que los derechos políticos y los derechos culturales reconocidos a los pueblos originarios en el derecho Constitucional estatal de Chiapas formar un solo bloque de estudio. (Barceló, 2016: 82)

En el Estado se reconoce la existencia de doce pueblos originarios y este se compromete a proteger y promover el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de todas las comunidades indígenas.<sup>2</sup> De igual manera les reconoce el derecho a elegir a sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones, fomentando la participación y empoderamiento de las mujeres.

En lo que se refiere a los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos de Chiapas, es decir en general para todos los que adquieran la ciudadanía Chiapaneca, la ley fundamental establece derechos y deberes que se adquieren con ella y las causas de su perdida, y por separado dedica un título al ejercicio democrático de ese derecho.<sup>3</sup> En este sentido, cabe mencionar que el enfoque intercultural del derecho se ha desarrollado notablemente en materia electoral, en buena medida debido a las resoluciones que bajo esa perspectiva ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tan es así que ha generado una guía de actuación para Juzgadores en materia de Derecho Electoral

---

<sup>2</sup> El artículo 7 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Chiapas, señala que este tiene una población pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y se reconoce y protege a los siguientes: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjobal.

<sup>3</sup> El artículo 20 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Chiapas, señala que se reconoce a quienes nazcan en Chiapas, así como a las mujeres y los hombres mexicanos que hayan residido en el estado por un periodo de más de cinco años consecutivos.



Indígena, cuyas recomendaciones y criterios se ponen a consideración de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de las tradicionales de los pueblos y comunidades (TEPJF, 2014: 15).

En el concepto constitucional de ciudadanía en Chiapas se advierten elementos interculturales tales como el reconocimiento de usos, tradiciones y costumbres, sistemas normativos, uso de la lengua, derechos de uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestres, procedimientos especiales en materia penal y el reconocimiento de las autoridades tradicionales, que justifican la utilización del enfoque jurídico intercultural en su construcción.

La interculturalidad promueve el dialogo como un proceso de interlocución y aprendizaje en reciprocidad que favorece las condiciones para la integración de saberes derivados de culturas diversas, las cuales se enriquecen unas a otras; en consecuencia, mediante el diálogo intercultural se pueden conocer los valores de los distintos pueblos y comunidades de Chiapas fortaleciendo con ello el respeto a las diferencias como elemento de la ciudadanía. (Casillas y Santini, 2009: 14)

A continuación, se describen los componentes básicos del enfoque intercultural que son de utilidad para construir ciudadanía.

El primero es la promoción del diálogo intercultural que impulse un proceso de interlocución y aprendizaje en reciprocidad que favorezca las condiciones para la integración de saberes derivados de distintas culturas, las cuales se enriquecen unas a otras al permitir la incorporación de elementos culturales diversos; en esta lógica de intercambio, los principios básicos de la justicia abierta pueden enriquecerse y desarrollarse también con un enfoque intercultural. (Casillas y Santini, 2009: 25)

Poner en práctica el diálogo intercultural requiere tener conciencia de la propia cultura en todas sus dimensiones, con sus virtudes y defectos, para aceptar el modo de ser de otra. La construcción de ciudadanía implica establecer un diálogo con todos los involucrados en el fenómeno jurídico; en el caso concreto, con los pueblos originarios, a fin de cambiar el sentimiento de justicia que estos colectivos tienen hacia la autoridad judicial.

El siguiente componente es el respeto a la diferencia cultural y lingüística que ha sido una demanda generalizada de los pueblos indios de Latinoamérica, los cuales han recibido y continúan recibiendo un trato injusto e inhumano, pese a que las constituciones políticas

modernas promuevan el respeto a sus derechos. Desde esta perspectiva, resulta indispensable entender que en un Estado existen diferentes culturas; por lo tanto, es lógico suponer que no hay un solo sistema normativo, es decir, que cada pueblo cuenta con el suyo y, además, con un esquema propio de valores, factores que deben ser tomados en cuenta por el nuevo paradigma en las buenas prácticas para impulsar el pluralismo y la inclusión.

La interpretación del derecho a la identidad cultural respecto a la garantía procesal de ser escuchado por un tribunal judicial, usando su propia lengua materna, al preverse, además, que en caso de que la lengua oficial no sea la natural el ciudadano sea asistido por un intérprete calificado, se traduce también en un componente de la interculturalidad.

Por último, un elemento fundamental de la interculturalidad es el proceso enseñanza-aprendizaje de los saberes diversos de los pueblos originarios, entendidos estos, como el conjunto de conocimientos prácticos, experimentales y reflexivos que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos, y se transmiten por generaciones mediante un mecanismo de pedagogía comunitaria. Los saberes diversos de los pueblos originarios se integran al conocimiento profundo del espacio territorial (la comunidad, el patio, la cocina, la milpa y la cueva), a una práctica cotidiana de saberes (el cultivo, la preparación de alimentos, el corte de leña, etcétera) y a una tradición fundamentalmente oral. (Avila, 2002: 59-90)

### **Desafíos de la construcción de ciudadanía desde el sistema electoral mexicano**

El sistema electoral mexicano se integra por el Instituto Nacional Electoral como autoridad administrativa; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como autoridad jurisdiccional y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, encargada de investigar los delitos electorales en el plano federal.

Las referidas instituciones participan en el único proceso de legitimación del poder en México, que es el denominado proceso electoral reconocido por la Constitución. Este se define como el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la Ley, realizado por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes Delegacionales en la Ciudad de México (LGIPE, 2021: artículo 207).

En dicho proceso electoral, corresponde al TEPJF, como órgano especializado, resolver controversias en esa materia, así como proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos; es decir, impartir justicia en el ámbito de su competencia. (TEPJF, 2014: 31) Entre sus actividades específicas están: resolver las impugnaciones de las elecciones de presidente de la república, gobernadores, diputados federales y senadores electos por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional; efectuar el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como calificar la legalidad de la elección presidencial y declarar al presidente electo.

En escenarios de diversidad cultural, el Tribunal Electoral, al resolver los conflictos de su competencia, deberá tomar en consideración los distintos principios que nacen del ejercicio jurisdiccional y que son reconocidos en el ámbito internacional, como el derecho colectivo de los pueblos y las comunidades indígenas en materia política. (TEPJF, 2015: 66)

Uno de estos derechos se traduce en la posibilidad de aplicar a los pueblos y las comunidades originarias sus sistemas normativos en la resolución de los conflictos electorales internos, quedando comprometido, en consecuencia, el juzgador a explorar las opciones que permitan a las instituciones jurídicas comunitarias ejercer el derecho a la autonomía; es decir, los tribunales electorales podrían, en un momento dado, solicitar alternativas de solución en conflictos jurídico-electorales a las propias asambleas comunitarias, donde las decisiones son tomadas y respetadas por la mayoría, hecho que podría formal y materialmente legitimar una decisión judicial.

Lo anterior puede entenderse en el sentido de que la autoridad judicial electoral reconoce que la aceptación de sus resoluciones judiciales en los pueblos originarios requiere no solamente de las formalidades que establecen los ordenamientos jurídicos, sino, además, de otros componentes, como el diálogo, la interacción, la inclusión y el respeto de las diferencias culturales, para alcanzar la legitimidad material. Estos componentes forman parte del discurso intercultural que se presenta en la ciencia jurídica como un enfoque que rompe con el esquema tradicional occidental de la construcción del derecho, al aceptar la existencia del pluralismo jurídico y, por lo tanto, la posibilidad de diseñar las normas jurídicas fundamentales, atendiendo al contexto cultural y político de todas las comunidades, los pueblos, los grupos, los sectores y las naciones que puedan existir en un Estado, Federación o confederación.

En general, se puede afirmar que la legitimación, que proviene de una resolución judicial en materia electoral, es entonces meramente formal, puesto que no implica la aceptación del colectivo. En escenarios de diversidad cultural, en los que cada pueblo cuenta con su propia forma de validar y elegir a sus representantes, es un reto para el sistema de justicia electoral legitimar a una autoridad municipal mediante una sentencia.

La justicia abierta, como modelo de gestión del TEPJF debe incluir el reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos originarios como expresión del derecho colectivo a la autodeterminación para contar con legitimidad en sus decisiones.

### **Propuesta para impulsar la ciudadanía intercultural. Diseño de un eje transversal en la educación superior.**

La transversalidad es una estrategia que interrelaciona la educación con la familia y la sociedad, pues favorece la formación integral y brinda un fundamento ético. Se caracteriza, además, por ser globalizante, porque atraviesa, vincula y conecta muchas asignaturas del currículo, lo que la convierte en un instrumento que recorre asignaturas y temas, con lo que cumple el objetivo de tener visión de conjunto.

Para fortalecer la construcción de ciudadanía, se propone generar un eje transversal en la educación superior y, dependiendo de los resultados, incluirlo en los demás niveles educativos.

Se trata de diseñar un eje transversal de carácter social con temas que amalgamen la interculturalidad, la legitimidad y la ciudadanía, de forma que se propicie y desarrolle la convivencia en la diversidad cultural. Esto requiere integrar campos del ser, el saber, el hacer y el convivir mediante conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orienten la enseñanza y el aprendizaje de las fuentes mismas de los sistemas normativos de los pueblos originarios de México en general, y, en lo particular, de las comunidades en las que conviven y dialogan todos los días, al definir así su identidad cultural e impulsar el diálogo, el respeto, la gestión e interacción de las diferencias.

Quienes cursen un programa que incluya este eje transversal tendrán una formación integral que considera el saber hacer y el saber ser, conocimientos básicos de diversidad cultural y lingüística, así como las actitudes y la disposición para la construcción de

conocimiento desde perspectivas diferentes, y el diálogo y las habilidades para la investigación, el análisis crítico y la construcción del diálogo intercultural.

Las áreas de oportunidad que se proponen para este eje transversal son:

- Taller de dialogo intercultural. Con el objetivo de promover un proceso de interlocución y aprendizaje en reciprocidad, favoreciendo las condiciones para la integración de saberes derivados de culturas diversas, las cuales se enriquecen unas a otras.
- Derecho a la identidad cultural. Con la intención de reflexionar acerca de la coexistencia de diferentes culturas, cada una con su propia lengua, tradición, religión, cosmovisión y sistema normativo, toda vez que cada pueblo o comunidad cuenta con un esquema propio de valores. Los anteriores factores deben ser tomados en cuenta para promover el respeto a las diferencias.
- Patrimonio cultural de los pueblos originarios de México. Con la intención de incorporar los saberes diversos de los pueblos originarios, entendidos como el conjunto de conocimientos prácticos, experimentales y reflexivos que se transmiten por generaciones, median- te un mecanismo de pedagogía comunitaria, a los contenidos de la ciencia del derecho.
- Cosmovisión de los pueblos originarios. Con la finalidad de estudiar los diferentes aspectos que determinan en los pueblos y las comunidades originarias la forma de ver y entender el mundo que los rodea.
- Lengua originaria. Con el objeto de establecer comunicación directa con los individuos hablantes de otra lengua originaria, logrando, con ello, entender los saberes de los pueblos y las comunidades desde otra visión.

De esta forma, todas las experiencias de aprendizaje deben acompañarse de la realización de proyectos de investigación vinculados con la comunidad, lo que permitirá desarrollar, en las alumnas y los alumnos, una conciencia de la inclusión y apropiarse de los métodos que utilizan las ciencias para aproximarse a las interpretaciones de la realidad que los rodea.

Ahora bien, para la construcción y puesta en marcha de este eje transversal, será necesario contar con un recurso humano debidamente capacitado, por lo que las instituciones de educación superior deberán implementar diversas estrategias, entre estas: proporcionar un

profesor de apoyo que trabaje con el profesor titular para alcanzar objetivos específicos, tales como el desarrollo de habilidades superiores de lectura y escritura en diferentes lenguas; poner énfasis en la enseñanza de palabras y frases que son más efectivas para lograr la comunicación, fomentando las habilidades de traducción, y explicar las tareas didácticas en diferentes lenguas, pidiendo la colaboración de varios agentes educativos, conocedores de distintas lenguas.

## **Conclusiones**

La interculturalidad, como discurso filosófico que promueve el diálogo, la interacción, la inclusión y el respeto de las diferentes culturas, en el siglo XXI se presenta en la ciencia jurídica como un enfoque que rompe con el esquema tradicional occidental de la construcción del derecho, al aceptar la existencia del pluralismo jurídico y por lo tanto la posibilidad de diseñar las normas jurídicas fundamentales atendiendo al contexto cultural y político de todas las comunidades, pueblos, grupos, sectores, naciones que puedan existir dentro de un Estado, Federación o Confederación.

La construcción de ciudadanía en Chiapas implica la suma de diferentes elementos éticos, culturales, jurídicos, cívicos y del conocimiento de los derechos fundamentales en general y en lo particular de los denominados políticos y culturales, así como los relacionados con su ejercicio democrático. En ese proceso de formación del futuro ciudadano y ciudadana participan instituciones como la familia, la escuela y el estado.

Derivado de la noción de ciudadanía que aporta el derecho constitucional estatal de Chiapas se advierten elementos interculturales como el reconocimiento de usos, tradiciones y costumbres, sistemas normativos, uso de la lengua, derechos de uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestres, procedimientos especiales en materia penal y el reconocimiento de las autoridades tradicionales, que justifican la presencia del ese enfoque jurídico en la formación ciudadana.

La ciudadanía intercultural debe ser entendida como un compromiso social que implica entre otras cosas la defensa del patrimonio cultural de los pueblos originarios, de sus conocimientos prácticos, experimentales y reflexivos que se transmiten por generaciones y de su cosmovisión. Así como desarrollar la capacidad para el diálogo, la interacción, el

respeto y la inclusión entre culturas, con la finalidad de definir su propia identidad y entonces comprender a los otros.

Desde la interculturalidad, y con la lógica de intercambio cultural, la construcción de ciudadanía puede enriquecerse y desarrollarse mediante la promoción del diálogo, el respeto a las diferencias y la identidad cultural, así como la enseñanza-aprendizaje de los saberes diversos y la cosmovisión de los pueblos originarios.

La construcción de ciudadanía debe ensamblar el conocimiento de los valores cívicos y éticos con los derechos políticos y culturales mediante la promoción del diálogo intercultural y el respeto a las diferencias que favorezcan y consoliden la democracia representativa con la participación de todas y todos, cumpliendo con las líneas fundamentales del moderno federalismo, la coexistencia del autogobierno y el gobierno compartido.

Dado que en escenarios de diversidad cultural cada pueblo cuenta con su propia forma de validar y elegir a sus representantes, es un reto para la construcción ciudadanía incluir el reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos originarios como expresión del derecho colectivo a la autodeterminación.

Por lo anterior, se propone, generar un eje transversal en la educación superior de carácter social con temas que amalgamen la interculturalidad, la legitimidad y la ciudadanía con los principios de justicia abierta, de tal forma que se propicie y desarrolle la convivencia en la diversidad cultural.

## **Bibliografía**

- Ávila, León. 2002. "La agroecología en resistencia: poder, autonomía y diálogo en la formación de promotores comunitarios en el noreste de Chiapas.", Argumentos, núm. 41, México, pp. 59-90.
- Barceló Rojas, Daniel. 2016. Teoría del Federalismo y del Derecho Constitucional Estatal Mexicano. México: IIJ-UNAM.
- Beuchot, Miguel. 2016. Interculturalidad y derechos humanos. Mexico: Siglo XXI.
- Casillas, Lourdes. & Santini, Laura. 2009. Universidad intercultural modelo educativo. México: SEP.

- Chacon Rojas, Oswaldo. 2005. Teoría de los derechos de los pueblos indígenas. México: IJ-UNAM.
- CGEIB, Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. 2007. Reflexiones de Raúl Fornet-Betancourt sobre el concepto de interculturalidad. México: CGEIB.
- Congreso de la Union. 2021. Ley General de Instituciones y procedimientos electorales. México: C.U.
- Diaz Romero, Erika. 2011. Educacion Intercultural en México, un analisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos. Mexico: SEP.
- Dietz, Gunther. 2017. “Interculturalidad: una aproximación antropológica”, Perfiles educativos, año 39, núm. 156, México, pp. 192-207.
- Parlamento Europeo. 2015. Propuesta de resolución sobre el papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales. Bruselas: Parlamento Europeo.
- Santos, Boaventura de Sousa. 2007. La Reinención del Estado y el Estado Plurinacional. Bolivia: CENDA.
- Santos, Boaventura de Sousa. 2010. Refundación del Estado en América Latina. Perspectiva desde una epistemología del sur. Bogota: Siglo del hombre.
- TEPJF. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2014. ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?. Mexico: TEPJF.
- TEPJF. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2015. Guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena. México: TEPJF.
- Todorov, Tzevetan. 1991. Nosotros y los otros. México: Siglo XXI.
- Todorov, Tzevetan. 2007. La conquista de América. *El problema del otro*. México: Siglo XXI.